



XXV Congreso Nacional y V Internacional de Estudios Electorales

La creación del Instituto Nacional Electoral y las reformas en los estados: el caso del estado de Coahuila.

MC Lerins Varela Castro

Jefe del Departamento de Investigación y Postgrado de la UA de Coahuila Unidad Torreón, México e
Investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UA de Coahuila y
Responsable del Cuerpo Académico "Política y Sociedad" de la FCPyS

Tema IV.- Sistemas electorales, reformas y justicia electoral

San José, Costa Rica, del 11 al 14 de noviembre del 2014

La creación del Instituto Nacional Electoral y las reformas en los estados: el caso del estado de Coahuila.

MC Lerins Varela Castro

En México, dentro del federalismo, hemos visto como los estados, a partir de sus reglas, tienen una marcada diferencia en los sistemas de elección, de los órganos electorales y del reconocimiento de los partidos en los diversos procesos electorales, imprimiendo una visión diferente de estos en cada uno de ellos, por este motivo, fue necesario la creación del Instituto Nacional Electoral que tiene como principal tarea el de ir construyendo un sistema electoral con reglas nacionales, que permitan el principio de equidad entre los partidos políticos en los diferentes procesos electorales de las entidades federativas.

Después de las reformas federales de 1996 y del 2007, en los estados se han llevado a cabo reformas que en algunos casos no han permitido una mayor participación ciudadana o en el fortalecimiento de los partidos políticos en un sistema de mas competencia e igualdad de recursos, tiempos campañas, etc.

En el caso de Coahuila, se aprobó en el 2001, una Ley electoral que permitiría una mayor participación ciudadana y más claridad en la competencia entre partidos, pero después del proceso electoral del 2005 para elegir gobernador del estado, se han hecho reformas en los años 2007, 2008 y 2009 a la misma que no logro concretar los objetivos planteados en los procesos electorales recientes para Diputados y Ayuntamientos. Ante esto, en este año se planteo la necesidad de crear un nuevo Código Electoral, misma que fue aprobado el pasado mes de junio, y que fue en su momento impugnada en los tribunales para su revisión por parte del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Convergencia y del Partido del Trabajo.

En este sentido, el presente trabajo hace un análisis de la presencia de los Partidos Políticos en el marco de las reformas federales a la Ley Electoral del Estado de Coahuila. Se abordan los resultados de los procesos electorales anteriores al 2013 y se deja pendiente el 2014 de diputados, ante la falta del fallo de la Sala Superior del Tribunal Electoral y se identifican los aspectos principales de la última Reforma Electoral estatal llevada a cabo en el 2010.

La presencia hegemónica del Partido oficial y las reformas electorales

Aunque en el Estado de Coahuila el PRI ha mantenido una hegemonía política electoral, en los últimos años ésta le ha sido disputada por el PAN, quien ha tenido un continuo avance sobre todo en elecciones municipales. En este

contexto de acentuada competencia electoral, en los últimos años se han realizado reformas a la ley electoral de Coahuila en la búsqueda de un marco legal que posibilite procesos electorales más legitimados. Lo anterior no necesariamente garantiza que las reformas realizadas faciliten la alternancia política o hagan más fácil la llegada al poder de los Partidos de oposición, antes bien, algunas reformas han obstaculizado más que facilitado los acuerdos y alianzas entre los Partidos Políticos, en otras ocasiones las reformas han sido consensadas entre los actores Políticos. La reforma electoral del 2001 pretendió tener este carácter de consenso, sin embargo, como lo vimos en su momento, al final se tuvieron que retirar propuestas de reforma por no haber llegado acuerdos y otras se aprobaron sin el aval de todos los Partidos Políticos.

La reforma electoral del 2001: Creando nuevos consensos

Después de las elecciones del 2 de julio del 2000, en que el PRI pierde en Coahuila por primera vez las senadurías y cuatro diputaciones federales, y ante la insistencia de los partidos políticos, los grupos parlamentarios y de la ciudadanía organizada, el Gobierno del Estado convoca a los partidos y a los diversos actores políticos a participar en una reforma electoral mas acorde con los tiempos actuales que vive el estado y el país.

En este sentido, el 31 de octubre del 2000 el Ejecutivo del Estado, por conducto del Secretario de Gobierno, convocó a los grupos parlamentarios, a los partidos políticos y a la sociedad en general a discutir y crear una nueva ley electoral, se adopta la figura de un Consejo Político como instancia de discusión de la agenda. Se pretende que esta instancia fuera plural por lo que queda integrado por el Secretario de Gobierno por parte del Ejecutivo, un Magistrado representando al Poder Judicial, los representantes de las seis fracciones parlamentarias del Congreso, un consejero por parte del Consejo Estatal Electoral y los representantes de los ocho partidos políticos (PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, PSN, PCD y PAS) con registro nacional y tres con registro local que son Partido de la Unidad Democrática de Coahuila PUDC, el Partido Cardenista de Coahuila PCC y el Partido de la Libertad (PL).

La Comisión Ejecutiva se instala el 4 de enero del 2001 integrada por el Secretario de Gobierno, el Magistrado, el Consejero electoral, dos Diputados, uno del PRI y uno del PRD por los Legisladores, además de los representantes de los partidos PAN, PUDC y del PCC y el 15 de enero del 2001 se firma un Convenio de Intención Política en el que se agenda las diversas actividades a desarrollar como: Foros, consultas ciudadanas y la agenda temática electoral. Esta se conformó con doce temas principales, mas de sesenta subtemas que engloban 40 puntos, entre los que sobresalen: a) La reelección inmediata de ayuntamientos y legisladores locales, b) Ampliación del periodo de los ayuntamientos a cuatro años, c)

Flexibilizar los requisitos para coaliciones, d) Establecer candidaturas comunes, e) Creación del Instituto Estatal Electoral, f) Reducción de los tiempos de campaña, g) Reglamentar las precampañas de los partidos políticos, h) Crear un órgano jurisdiccional en materia electoral, independiente, autónomo, y como única instancia en el Estado. I) Establecer en la Constitución Política del Estado las figuras de referéndum, plebiscito e iniciativa popular y j) Discutir la propuesta de equidad de género en las candidaturas de los partidos.

Los acuerdos políticos

Después de los primeros acuerdos, el PAN decide retirarse de la mesa de discusiones, siguiéndolo el PRD. Los motivos fundamentales fueron: 1) La no creación de dos circunscripciones, 2) No al incremento de 32 a 35 de legisladores, 3) No al doble voto simultáneo del modelo aplicado en Uruguay, 4) La falta de claridad en la constitución del Instituto Estatal Electoral, 5) No transparencia en la definición de los topes de campaña y 6) La no definición clara de las cuotas de género.

Ante el retiro del PAN y después de una campaña intensa de descalificaciones, el PRI decide retirar la mayoría de sus propuestas en las que no existía consenso. Las negociaciones continúan en el Congreso del Estado entre las fracciones de los Partidos y el Ejecutivo, acordándose finalmente aprobar las enmiendas constitucionales a la Ley electoral, dejando las leyes secundarias para una segunda reunión.

Lo Aprobado en el Congreso Local

El primer punto de acuerdo que aprobaron todas las fracciones políticas en el Congreso local, fue modificar la Constitución del Estado de Coahuila y reconocer la necesidad inaplazable de las figuras de plebiscito y referendo, así como de fortalecer la imparcialidad de los organismos públicos, evitar la discriminación por cualquier motivo, protección de los derechos ciudadanos y fomentar, promover y ejercer los instrumentos de participación ciudadana y comunitaria.

Además de declarar a los partidos políticos como instituciones de interés público, se crea el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, la afiliación individual y libre, además definiendo los aspectos de financiamiento y equidad en los medios de comunicación.

Se define la creación de un sistema jurisdiccional de medios de impugnación uniinstancial que sería el Tribunal Electoral con autonomía y designados los magistrados por el mismo Congreso.

El segundo acuerdo fue la creación de la Ley del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila y del nombramiento de los

consejeros para cumplir sus funciones del 30 de noviembre del 2001 hasta el 2006 con escalonamientos para dos de ellos, otros dos en el 2007 y en el 2008 el ultimo, los suplentes serian por seis años.

El tercer acuerdo fue la creación de la Ley del Tribunal Electoral, la Ley de medios de impugnación, en la elección de ayuntamientos renovarlos cada cuatro años (a partir del 2005) y agregar un síndico de primera minoría, además de juicio político y penal para los funcionarios electos.

En lo que se refiere a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales en donde sobresalen las candidaturas con equidad de género (70% - 30% no obligatorio), 2% de la votación para tener derecho los partidos a plurinominales, regidores de mayoría y proporcional según el tamaño del municipio, el 1.5% de electores para obtener el registro como partido político en siete distritos de veinte, distribución de recursos públicos en un 66% de acuerdo a la votación obtenida y un 34% repartidos en partes iguales para todos los partidos con registro, reglamentar las pre-campañas y fijar un tope de solo un 15% máximo para las mismas.

Por otra parte se definen los tiempos de pre-campañas que se llevaran a cabo dentro de los 30 días antes del inicio de los registros y la prohibición de promocionarse los interesados antes de los tiempos estipulados a través de los medios de comunicación. Respecto al registro y a las campañas; se define que el registro de los candidatos que aspiran al gobierno del estado será de 48 días antes de la jornada electoral y cierre de los registros 43 días, en el caso de alcaldes y diputados es entre los 48 días y los 44 antes del día de las votaciones. En lo referente a los tiempos de las campañas se estipula lo siguiente: para gobernador será de 53 días, diputados 38 días y en lo que se refiere a las alcaldías es de tres tiempos, municipios con menos de 20 mil electores 13 días, entre 20 y 70 mil ciudadanos 23 días de campaña y los mayores de 70 mil electores es de 38 días.

Por ultimo se crea la Ley de Participación Ciudadana con la finalidad de fortalecer los derechos de los ciudadanos y habitantes de Coahuila para participar en la vida pública y que exista un control comunitario de la función pública.

Los instrumentos de participación ciudadana y/o comunitaria serán el plebiscito, el referendo, la iniciativa popular, la consulta popular, la colaboración comunitaria y la audiencia pública.

El proceso electoral

Al inicio el proceso electoral se ve empañado por una serie de enfrentamientos entre los partidos involucrados, a raíz de la aprobación por parte del PRI en el Congreso del Estado de las leyes secundarias consistiendo

principalmente en lo concerniente a los mecanismos de integración del nuevo Instituto Electoral, de los topes en los gastos de campaña, incluyendo los nombramientos de los nuevos consejeros electorales.

Las nuevas reglas ante la ciudadanía

Con lo anterior descrito el 29 de septiembre del 2002 se probó un nuevo sistema electoral, con campañas más cortas, equidad en los topes de gastos de campañas, control de medios de comunicación y de propaganda, y tiempos pre y electorales también más cortos. Uno de los aspectos que más genera preocupación es la falta de participación de los ciudadanos en los procesos electorales ya sean locales o federales, siendo considerado Coahuila como uno de los Estados con mayores niveles de abstencionismo, que en este proceso mantuvo el 52% en promedio en el Estado, partiendo del hecho de que Saltillo que es la capital de Coahuila y es el segundo municipio en el número de electores, la abstención fue superior al 60%, y más del 50% en el municipio de Torreón que era el más grande del listado nominal (cuadro 1).

Todo esto manifestó, que aun con el hecho de crear una nueva Ley Electoral en el Estado la ciudadanía no va a participar en los procesos electorales, sino que hay una serie de factores que tienen que dar certeza al proceso mismo, ya que, se siguieron manifestando las mismas anomalías que hay en las elecciones en este país y en los estados como son:

Falta de credibilidad en el órgano responsable del proceso electoral, debido que del recién creado Instituto Electoral y de Participación Ciudadana fueron acusados cuando menos tres de ellos de pertenecer al PRI y de ser colaboradores cercanos del Gobernador del Estado, y aunque hubo una convocatoria abierta para conformar el Consejo General se acusó a los consejeros electos de llegar por “invitación”, incluyendo al que quedó de Presidente y que pertenecía el Consejo Electoral saliente. Lo anterior se dio a conocer en los medios lo que vulneró su credibilidad.

El no cumplimiento por parte de los partidos del principio de equidad de género en candidaturas de los propietarios tanto en ayuntamientos como en los diputados.

Por último, no se pudo reglamentar que el Ejecutivo y los Alcaldes suspendieran la publicidad de sus actividades durante el proceso electoral, que duraron hasta el mismo día de las votaciones. Esto evita la transparencia y la credibilidad del proceso mismo.

Resultados

Una vez que pasó el proceso electoral, vemos con satisfacción que en principio no se hizo presente la violencia durante la jornada electoral y

postelectoral, que siempre aparece en las contiendas con resultados muy cerrados entre dos fuerzas políticas, que es lo que sucedió en varios de los municipios y distritos electorales. Además que no se puede ocultar que el nuevo mapa electoral como resultado de estas elecciones, llevaban la finalidad de fortalecer a los partidos en cada una de las diferentes regiones con miras al año 2005 en el que se ha de elegir Gobernador, y que así como van las tendencias de antemano se ve una lucha cerrada entre el PRI y el PAN, a pesar de que la votación global en el estado favorezca al PRI (cuadro 4) no es nada segura como se manifestó en las elecciones federales del año 2000.

Que es irreversible la permanencia de la alternancia de los partidos en los municipios ante la consolidación de un sistema de partidos. La alternancia llegó a Coahuila desde 1984 cuando el PRI pierde por primera vez dos municipios como fueron Ciudad Frontera y Ramos Arizpe, y que con excepción de las elecciones de 1987 en que obtiene “carro completo”, la oposición a gobernado más de 20 ayuntamientos de los 38 que tiene el estado, y de que algunos de estos municipios han sido gobernados por otros partidos diferentes al PRI hasta tres ocasiones (cuadro 3). En este sentido por ejemplo, de los cuatro municipios más representativos de Coahuila que aglutinan a más del 60% del electorado, que son: Torreón, Saltillo (capital), Monclova y Piedras negras, solo este último no conoce la alternancia de un gobierno diferente al PRI.

Por otro lado la reglamentación de las precampañas y las campañas electorales y aunado esto a la reglamentación del uso de los medios por parte de los partidos políticos -que son considerados como áreas fuertes de la mercadotecnia política-, vemos que los partidos y los medios de comunicación tendrán forzosamente que participar en nuevas formas de promover la participación de la ciudadanía ante los nuevos retos que exige el fortalecimiento de la democracia en el Estado de Coahuila y en el País.

En el aspecto de las candidaturas de género como lo manifiesta la investigadora Rosario Varela, los resultados son elocuentes ante una ley que no era obligatoria, en los 38 Ayuntamientos solo se registró por parte de los partidos políticos a 21 candidatas, en donde destaca el PRD con siete, PAN con tres y el PRI solo una candidata de un total 187 registrados. Y en el caso de las diputaciones de mayoría relativa, solo fue de 52 puestos de elección (27%) de 195 registros. Y partiendo de lo anterior en que no hubo responsabilidad de los partidos políticos en promover la equidad de género en cuanto a candidaturas, en los resultados fue totalmente adverso, dado que en ningún municipio fue favorable la votación para que una mujer presidiera algún Ayuntamiento, y en el caso de las diputaciones solo se obtuvo el triunfo de las dos candidatas del PRI de 20 diputaciones de mayoría.

Por ultimo vemos que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, ha hecho un papel bastante aceptable pero al igual que el Instituto Federal Electoral y el resto de los Consejos e Institutos Electorales del País, tendrá que ir creando su propia dinámica que venga a fortalecer su autonomía y a la vez ir desarrollando la profesionalización del mismo Instituto y de esa manera tener una credibilidad que le permita estar en condiciones para desarrollar una nueva cultura política y así poder llevar a cabo la elección de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos en el año 2005.

La reforma Electoral de Coahuila en el 2007 y 2008

En agosto del año 2007 se hicieron modificaciones a la Ley Electoral de Coahuila, mismas que tienen que ver con los incrementos a los porcentajes de deberán obtener los partidos políticos para mantener su registro y obtener cuando menos una diputación, la modificación de las fechas de la elección de septiembre a octubre, pasar de 3 a 4 años los diputados, disminución de diputados en el Congreso de 35 a 31 (20 de mayoría y 11 de representación proporcional) aunado a lo anterior, hizo una elección intermedia sin la elección de Ayuntamientos dado que son de 4 años, previéndose como se constato en las pasadas elecciones, una gran abstención.

A esto le agregamos la nueva reforma electoral a nivel nacional, que ya en esta elección empezó a influir en el proceso electoral en las campañas y en el uso de los medios electrónicos.

De acuerdo con los resultados que ya se preveían, nos indican que para Coahuila, se dio un fortalecimiento del bipartidismo presente entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, obteniendo entre los dos partidos el 80% de la votación promedio en diversas elecciones en el Estado de Coahuila.

Antecedentes

Como primer paso para la concretización de la reforma electoral para el Estado de Coahuila, el Congreso del Estado aprobó el 18 de julio del 2007 el Dictamen de Reforma Constitucional en materia electoral, mismo dictamen que fue aprobado el 1 de agosto del mismo año siendo publicado en el periódico oficial al día siguiente, que actualizo el marco jurídico tomando en cuenta tres líneas esenciales que son: la especialización de los órganos electorales, el fortalecimiento del Poder Legislativo y la homologación de los procesos electorales locales.

De tal forma, el párrafo primero del artículo 33, establece que “El Congreso del Estado se renovará en su totalidad cada cuatro años y se integrará con 20 diputados electos según el principio de mayoría relativa mediante el sistema de

distritos electorales, y con 11 diputados electos bajo el principio de representación proporcional, los cuales serán asignados en los términos que establezca la ley reglamentaria entre aquellos partidos políticos o coaliciones que obtengan cuando menos el 3.5% de la votación válida emitida en el Estado para la elección de diputados.

La fracción VI del Artículo 35, modifica que: “El tope máximo de diputados que puede alcanzar un partido o coalición por ambos principios, no excederá de 20 diputados en los términos que disponga la ley.”

Otros aspectos aprobados corresponden a los gastos de campaña, por ejemplo, en la elección del 2005, el tope de campaña para gobernador fue de ocho millones de pesos y la propuesta aprobada en el dictamen es de 15.6 millones de pesos. En tanto que para diputados, en la elección anterior el tope promedio fue de 220 mil pesos y ahora lo fija en 470 mil pesos, aunque la propuesta original era de un millón 200 mil pesos.

Para los municipios también aumenta, en virtud de que se estableció una fórmula que fija un factor 12, el cual se multiplica por el número de electores.

Por ejemplo, en Monclova el tope de gastos de campaña anterior fue de 670 mil pesos y ahora con la nueva fórmula será de un millón 727 mil pesos.

En los municipios con menos de tres mil 500 electores, el tope de gastos de campaña se modifica de 30 mil a 42 mil pesos.

El dictamen aprobado contemplo eliminar cuatro diputaciones de representación proporcional y 91 regidores de los 38 ayuntamientos.

Además cambia la fecha de los comicios, del último domingo de septiembre, al tercer domingo de octubre, salvo cuando la jornada incluya la elección de gobernador que tendrán que sujetarse a la fecha que fije el Instituto Electoral.

La propuesta de reforma electoral también planteo que los partidos políticos deben alcanzar el tres por ciento de los votos emitidos para conservar su registro y el 3.5 para entrar a la distribución de las diputaciones de representación proporcional.

La reforma electoral considera también establecer la figura del secretario técnico de las mesas directivas de las casillas, quien se encargará del llenado de las actas de escrutinio y revisará que el procedimiento de la votación sea el ordinario para evitar impugnaciones de trámite.

Finalmente el Artículo Segundo de los Transitorios, determina: “El periodo de cuatro años para los integrantes del Congreso del Estado será aplicable a partir de la renovación a realizarse en el año 2013. En consecuencia y por única ocasión, los diputados electos en el proceso electoral a celebrarse en el año 2008, correspondiente a la Quincuagésima Octava Legislatura, durarán en su encargo el

período comprendido del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011 y los diputados electos en el proceso electoral a celebrarse en el año 2011, correspondiente a la Quincuagésima Novena Legislatura, entrarán en su encargo el 1 de enero de 2012 para culminar el día 31 de diciembre de 2013.

Avances o retrocesos

Entre los avances de la nueva ley, destaca la modificación del procedimiento para designar a los consejeros electorales, que es importante, salvo que al aplicar dos exámenes (teórico y práctico) limita la participación más amplia de la ciudadanía con deseos de participar, ya que excluye otros factores como la ética y el compromiso social que son más importantes para ser consejero que el academismo.

En cuanto a los medios de comunicación, a nivel local no hubo mayores cambios, que con la ley electoral federal recientemente aprobada si hubo cambios significativos, como es el caso de los tiempos asignados a los partidos políticos por parte del Instituto Federal Electoral, lo que de entrada creo roces con el IEPPC, en quien sería el responsable de entregar los tiempos y quien se haría cargo de los monitoreos. Por lo que después de esta elección la normatividad al respecto tendrá que adecuarse aun más.

Respecto a la necesidad real de abrir mayores espacios a la inclusión femenina en las candidaturas de los partidos, también se postergo, cuando se pedía establecer la paridad, es decir cincuenta por ciento para cada género, pero se mantuvo la relación de setenta (hombres) y treinta (mujeres). Actualmente en el proceso electoral en las listas de candidatos, se incluyeron pocas mujeres en la contienda por las diputaciones de mayoría relativa, quedando por lo tanto solo tres diputadas por parte del PRI de 20 electos. Y en el caso de los diputados plurinominales se agregan tres más de las 11 asignadas.

Un aspecto importante, es que Coahuila sigue siendo precursor en la elección de ayuntamientos por cuatro años y ahora con la propuesta de tener diputados de por cuatro años.

La importancia también esta en seguir promoviendo el uso del voto electrónico en los procesos electorales locales en Coahuila en la contienda del 2008.

Por ultimo, considerando que la ley electoral de Coahuila tiene avances bastante

La Participación Ciudadana en Coahuila en el 2008

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) se declaró listo para los comicios del 19 de octubre, en los que compitieron nueve partidos políticos, siete con registro nacional y dos locales.

Además de buscar las posiciones de mayoría relativa, los partidos lucharon por alcanzar el porcentaje mínimo de votos para entrar al reparto de diputaciones plurinominales, que es de 3.5 por ciento del total de sufragios válidos emitidos.

De acuerdo con el Artículo 46 de la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales, otro reto de los partidos fue obtener el tres por ciento de los votos válidos emitidos, pues de lo contrario perderán su registro y dejarán de recibir el dinero de las prerrogativas.

El comportamiento de la participación ciudadana en elecciones locales

1996 52.69%

1999 50.96%

2002 46.47%

2005 52.74%

2008 40.44%

2009 52.15%

Y por tercera ocasión en Coahuila se hizo uso de 100 urnas electrónicas (en el 2005 se utilizaron 40 en solo cinco municipios) mismas que fueron autorizadas por el IEPC con carácter vinculatorio, actualmente se cuenta con más de 200 equipos, en los siguientes años, los partidos no aprobaron su uso.

2010: Un nuevo Código Electoral

Propuesta de Reforma del Partido Revolucionario Institucional

El pasado 10 de mayo, el Grupo Parlamentario del PRI presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma constitucional como parte del proceso de reforma electoral que inició en Coahuila desde el mes de enero.

Efectivamente, el 25 de enero, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, entregó la propuesta del Partido y el 28 de ese mismo mes, la Diputación Permanente aprobó el acuerdo propuesto por sus diputados sobre la realización de foros de opinión para una reforma en materia electoral.

El 2 de febrero, se aprobó un acuerdo de la Junta de Gobierno para invitar a los actores políticos del Estado a definir los temas de la reforma y, por acuerdo de la

Diputación Permanente el 3 de febrero, fue publicado el referido acuerdo el día 5 de febrero.

Entre el 8 y el 18 de febrero, se recibieron las propuestas de temas para la reforma electoral y el 19 del mismo mes se realizó una sistematización de las propuestas temáticas recibidas.

El 23 de febrero, la Diputación Permanente sorteó el orden en que se realizarían los foros de opinión y para designar las comisiones de diputados encargados de su organización.

El 17 de marzo el Pleno del Congreso aprobó las propuestas relativas a la Convocatoria de los foros y la integración de la Comisión Especial para la Reforma Electoral.

El 19 de marzo se publicó la Convocatoria para la celebración de 11 foros de opinión en las ciudades de Torreón, San Pedro, Matamoros, Frontera, Monclova, Acuña, Piedras Negras, Parras, Saltillo, Múzquiz y Sabinas y fueron distribuidos carteles con la Convocatoria.

Cabe mencionar que las ponencias recibidas en los foros fueron publicadas al día siguiente de ser entregadas por la comisión de diputados de cada uno de los foros, hasta la conclusión de los mismos y continúan en la página electrónica del Congreso a disposición de los coahuilenses.

El 10 de mayo, el Grupo Parlamentario del PRI presentó al Pleno la iniciativa para la reforma de los artículos 18, 27, 33 y 35 de la Constitución Política del Estado en materia electoral.

La trascendencia de la reforma electoral en Coahuila, requería de una modificación constitucional, para establecer el marco jurídico general que será reglamentado en la legislación secundaria.

Objetivos por parte del Revolucionario Institucional

Facultar al IEPC para que dé seguimiento a los compromisos de campaña. Se faculta al Instituto para que verifique el cumplimiento de las promesas de campaña.

Las referencias a la propaganda en radio y televisión, así como la sanción del incumplimiento de las disposiciones en esa materia.

Reglamentar la apertura de paquetes electorales y el recuento total y parcial de la elección. Se faculta a los comités distritales y municipales para que mediante un procedimiento expedito se pueda llevar el computo de elecciones a través del recuento.

Regular las candidaturas comunes y coaliciones, para que se puedan constituir expresiones políticas fuertes que representen a los coahuilenses. Que la propaganda visual sea concretada por el IEPC. Contratación y retiro de propaganda electoral impresa por el IEPC. Se faculta al Instituto para contratar, asignar y retirar la propaganda electoral impresa (incluidas bardas). Reducción de Municipios. Se plantea la eliminación del Síndico de Minoría. La disminución de los topes de gastos de campaña. Dotar de mayores facultades al IEPC y al Tribunal Electoral en materia de fiscalización de recursos de los partidos políticos. Se crea la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, como unidad técnica del Instituto. Su titular será nombrado por el Consejo General, a propuesta de su Presidente y contará con autonomía de gestión. Se crea la figura del Contralor Interno del IEPC, dotado con autonomía de gestión; y será designado por el Congreso del Estado, con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes.

La reforma propone establecer como causal de nulidad de una elección el exceso en topes de gastos de campaña del candidato ganador.

Evitar la coacción del voto mediante la promesa de entregar beneficios individuales a los ciudadanos. Se amplía esta disposición en el proyecto de reforma y se establecen sanciones para esta conducta.

Suspensión de la difusión y operación de los programas de beneficio social de los tres órdenes de Gobierno. Se eleva a rango constitucional local la prohibición de difundir propaganda gubernamental durante los tiempos de precampañas y campañas electorales.

Promover el voto de los coahuilenses en el extranjero y el de los que se encuentren en otras partes del país.

Y por último la inclusión de las candidaturas independientes.

Después de la aprobación del nuevo Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vino la impugnación por parte de los partidos ya mencionados, con los siguientes resolutivos, en el cual hay que destacar la anulación de las candidaturas independientes, lo cual requiere una discusión aparte:

.14/2010 Y SUS ACUMULADAS 15/2010, 6/2010 Y 7/2010 (Listado por primera vez el 13 de octubre de 2010)

ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD promovidas por los Partidos Políticos Convergencia, del Trabajo, de la Revolución Democrática y Acción Nacional, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila, demandando la invalidez del Decreto 262, por el que se reforman las fracciones I y

II del artículo 18, el artículo 27, el primer párrafo del artículo 33, el primer párrafo y la fracción III del artículo 35, la fracción IV del artículo 36 y la fracción V del artículo 76 de la Constitución Política del Estado de Coahuila; el Decreto 263, por el que se expide el Código Electoral y el Decreto 264, por el que se adiciona la fracción VI al artículo 82 y se reforma el artículo 89 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Político-Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila
(PONENCIA DEL SEÑOR MINISTRO SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ).

PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad y sus acumuladas.

SEGUNDO. Se reconoce la validez de los artículos 33, párrafo primero, de la Constitución Política; 12, 18, numeral 1, inciso e), 29, numeral 1, inciso e), 35, numeral 1, inciso k), 44, numerales 1, inciso e), 2 y 3, 45, numeral 1, 46, numeral 1, incisos f) y g), 72, numeral 5, 133, numeral 7, 134, 141, numeral 2, 146, numeral 3, 159, numeral 5, 160, numeral 1, inciso d), 182, numeral 2, 192, numeral 3 y 194, numeral 2, 265, numeral 1, inciso a), 271, numerales 3 y 5 y 273, numeral 2, del Código Electoral; y 89 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Político-Electoral y de Participación Ciudadana, todos del Estado de Coahuila.

TERCERO. Se declara la invalidez de los artículos 27, numeral 4, de la Constitución Política; quinto transitorio del Decreto Número 262, por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política; 6, numeral 6, referente a Los ciudadanos podrán participar como candidatos independientes a los cargos de elección popular, en los términos establecidos por este Código. 25, numeral 1, inciso e) se refiere a Mantener representantes y oficinas en cuando menos los diez municipios de mayor población del Estado, debiendo presentar al Instituto los documentos que acrediten el cumplimiento de tal requisito, y, 43, numeral 2 con referente a, durante los procesos electorales, es derecho exclusivo de los partidos políticos contratar espacios en los medios de comunicación impresos para difundir mensajes de propaganda institucional y los orientados a la obtención del voto durante las precampañas y campañas electorales a través del Instituto, conforme a las normas y procedimientos que se establecen en el presente artículo. Los precandidatos y candidatos sólo podrán hacer uso de los espacios que les asigne su partido político o coalición, en su caso, de conformidad con las disposiciones, 142, 143 los anteriores hacen referencia a las candidaturas independientes y 213, numeral 8 este se refiere a En ningún caso podrá solicitarse a las autoridades jurisdiccionales que realicen recuento de votos respecto de las casillas que hayan sido objeto de dicho procedimiento en los comités respectivos., del Código

Electoral; y segundo transitorio del Decreto Número 263, por el que se expide el nuevo Código Electoral, todos del Estado de Coahuila, en la inteligencia de que esta determinación surtirá efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de este fallo al Congreso de ese Estado.

CUARTO. Se declara fundada la acción de inconstitucionalidad en contra de la omisión legislativa del Congreso del Estado de Coahuila, consistente en regular de manera deficiente en el Código Electoral de esa entidad federativa, los supuestos y las reglas de los recuentos parciales o totales en el ámbito jurisdiccional, prevista en el inciso I) de la fracción IV del numeral 116 de la Constitución Federal. En consecuencia, el órgano legislativo de dicho Estado deberá legislar a la brevedad posible, para corregir la deficiencia apuntada, antes de la celebración de la jornada electoral estatal del primer domingo de julio de dos mil once. QUINTO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

CONCLUSION

En principio no se puede hablar de victoria partidista, con una participación ciudadana del 50%, En el actual sistema representativo que tenemos en México, cualquier resultado de la votación por simple mayoría es legal y se supone que es legítimo, el problema es que el sistema de referencia más cercano que tenemos es el de Latinoamérica, ellos ya van en procesos de legitimización más amplios, como es el caso de la segunda vuelta, eso nos indica que el problema de nuestra sociedad, se quiera reconocer o no, es que cada día el que gana, tiene menos legitimidad porque no tiene el consenso total de la sociedad, ni siquiera en la mayoría de los casos del 50% de los que tienen derecho a votar.

Si nosotros hablamos del congreso que se eligió el pasado domingo 8 de julio del 2014, lógicamente no tiene el sustento de las bases que deberían de participar en un proceso electoral. Sin embargo esto no es nuevo, lo hemos vivido desde el 2006, con que se tenga una votación del 50% más uno es legítima, a pesar que en la realidad es que la sociedad es representada por el 20% del padrón electoral que va a las urnas. Por ello se buscan nuevas formas para definir el juego del sistema representativo en que se involucre más la ciudadanía.

La instrumentación de la segunda vuelta sigue siendo una opción, aunque algunos expertos digan que no, el objetivo de la misma no es ganar simplemente, sino legitimar el proceso con la mayoría de la gente satisfecha y reconociendo a las

personas que eligieron a través del voto. Hay voces que dicen que no, que la democracia ¿en dónde queda?, pero con un sistema de partidos que lejos de fortalecerse, se debilita. Se crean sistemas bipartidistas o tripartidistas, no tiene caso abrir muchas puertas si la gente no vota por estas opciones, es algo que resulta incongruente. Si esto se va a seguir trabajando con un sistema de tres partidos, debemos de elevar el porcentaje de votación y no simplemente que sea el de mayoría, aquí se manejan porcentajes para obtener curules o para conservar el registro.

En ese sentido lo que necesitamos es:

- 1.- El que tenga más votos, tenga más apoyos, que tenga más legitimidad.
- 2.- Que los partidos minoritarios sigan participando, pero con otras reglas, como se hace en Europa, donde hacen alianzas, no debemos aceptar por ningún motivo que porqué existen muchos partidos se deban borrar todos.

Por otra parte, vemos que los partidos y las cámaras están desprestigiadas, lo vemos en cualquier encuesta seria, estas figuras se encuentran en los últimos lugares de aceptación del público, por lo que insisto se deben cambiar las reglas del juego. En ese orden de ideas, es necesario considerar además las candidaturas independientes (que fallaron para Coahuila), pues las reglas actuales fortalecen exclusivamente al sistema de partidos que tenemos en el país y ya no cree en los partidos y mucho menos en el sistema. Y deben de contar la voz de las minorías, porqué sino se va a perder el equilibrio y existirá una hegemonía partidista, para que los partidos grandes no queden sobre representados y las minorías se queden sin representación.

Otro tema que se ha puesto continuamente a discusión, es si será necesario hacer que el voto sea obligatorio para combatir el abstencionismo, al respecto, el contexto social en México es distinto, en otros países están ya acostumbrados, ello debido a las dictaduras militares que han padecido y al momento de votar es obligatorio precisamente para evitar que las dictaduras vuelvan. Esa es una prerrogativa muy complicada en el contexto mexicano, sería bastante complicado decirle a la gente de un día para otro que el voto es obligatorio, yo aseguro que buscaríamos un pretexto para no ir a votar. Y aquí el voto sigue siendo un derecho ciudadano, es una decisión del ciudadano decidir si vota o no, o si anula el voto.

El otro problema que enfrentamos, es en la designación de los consejeros ciudadanos, en donde se nombran consejeros que no representan a los ciudadanos y quienes vienen representando son a los partidos, que a su vez, designaron a estos consejeros. En México sigue siendo una condición estar avalado por un partido y no por la ciudadanía, en ese sentido no se puede mantener una real autonomía.

En este rubro, creo que todos los organismos electorales, tanto los que vigilan el proceso y los que sancionan, les falta mucho camino por recorrer para perfeccionar el sistema de elección popular con amplia legitimidad. A pesar de ser en principio un órgano ciudadanizado, los partidos al fijar las reglas del juego, cooptan todos los procesos. El problema de nuestras instituciones es su parcialidad, siempre se inclinan hacia alguna parte de la balanza en la que se ven afectados en la mayoría de las veces los derechos políticos de la ciudadanía.

Por último, con los resultados obtenidos en los dos últimos procesos locales (Diputados 2014 y Ayuntamientos 2013), el Poder Legislativo de Coahuila no ha sido un contrapeso real de oposición que eche atrás alguna iniciativa impulsada por el PRI, como lo es el caso de la Reforma Electoral, además de los resultados de los ayuntamientos, en donde el Partido Revolucionario Institucional mantiene la mayoría de las 38 alcaldías y gobierna el 70% del estado.

No por casualidad, una de las tareas asignadas al INE, es el seguimiento de las campañas a través de las respectivas Comisiones, así como también los Institutos Estatales Electorales (Oples). Se pretende con esto aplicar un principio de equidad y de lo recientemente aprobado con respecto a la transparencia de los recursos, tanto de los partidos como de los Oples, el incremento del umbral del registro, la equidad de género, las candidaturas independientes, y lo ya contemplado a los medios de comunicación, además de responsabilizarse de la compra de tiempos y su distribución entre los distintos partidos a fin de que no exceda lo señalado por el reglamento.

Respecto a las nuevas reformas de carácter nacional, en el estado de Coahuila, su congreso a iniciativa del gobernador, se venían dando una serie de reformas electorales importantes desde el año 2001, mismas que pretendían principalmente fortalecer el sistema de partidos, aumentar la participación ciudadana, la creación de tiempos de precampañas y campañas, disminución de los tiempos de campañas, ciudadanización y autonomía de los órganos electorales, armonizar las leyes electorales de la federación como la limitación de uso de los medios electrónicos entre otros, pero que no fueron suficientes para incrementar la participación ciudadana, se incrementó el número de los partidos locales (en la última elección participaron siete partidos políticos), se desprestigió el papel de los órganos electorales, etc. Por último, en el estado de Coahuila al igual que otros, no se han armonizado con la reciente reforma electoral.

